

La crisis desatada por la pandemia ha ofrecido una oportunidad para visibilizar las ventajas que tiene formar parte de la Unión Europea. Hoy las opiniones públicas de los estados miembros se debaten sobre el ritmo de vacunación, el cumplimiento de los contratos con las farmacéuticas o el pasaporte sanitario. En menos de un año la denostada POLÍTICA, la dinámica de trabajar en comandita y buscar acuerdos ha permitido que tengamos, ya aprobadas y en uso en la Unión, cuatro vacunas a las que irán sumándose otras tantas antes de que acabe el año. Un paso decidido para avanzar en una Europa de la salud.

Esa es la grandeza de la Unión. Todos deberíamos de ser conscientes de que, ante una catástrofe global como es una pandemia, ni el más grande y potente de los estados europeos, por si solo tiene margen. Ninguno sería capaz de poner en marcha una respuesta de la dimensión y potencia que las instituciones comunitarias han planteado frente a las consecuencias sanitarias, pero también económicas y sociales de la pandemia.

Hoy sabemos que, sin el impulso decidido de la Unión, que inyectó 2.700 millones de euros al comenzar la pandemia en el sistema europeo de investigación biotecnológica, simplemente hoy no tendríamos vacunas. También sabemos que el esfuerzo mancomunado de estados e instituciones europeas invirtió casi

otros 10.000 millones en comprar dosis cuando las vacunas eran solo un proyecto prometedor. Una apuesta de riesgo, sí, pero imprescindible para mejorar la capacidad industrial de quienes debían convertir los hallazgos de la ciencia en decenas de millones de viales listos para su uso. Y para conseguir a un precio imbatible, las dosis necesarias para inmunizar a toda la ciudadanía de la Unión y para ayudar a los países menos desarrollados en sus procesos de inmunización.

También sabemos que muchas economías europeas simplemente no habrían sobrevivido a entre tres y diez años de confinamientos, lo que tarda una vacuna en desarrollarse sin este inédito apoyo. Es fácil imaginar también qué hubiese ocurrido si en ese plazo y en medio de una crisis sanitaria, asistencial y humana sin precedentes, cada ciudad, cada región, cada estado se hubiese lanzado a comprar por su cuenta la vacuna disponible, quizá la única.

Las consecuentes crisis de precios, la dependencia de casi todos de una gran potencia o peor aún de una farmacéutica, podrían haber desencadenado males mayores incluso que la propia pandemia. Sin duda hubiese sido el final de la relativa concordia en la que vivimos al menos en el continente europeo y de su posición referente en materia de derechos y libertades, política social y desarrollo sostenible.

Hoy, cuando se critica, con razón, la escasa transparencia de los contratos y las limitaciones que tiene la Unión frente a las farmacéuticas, conviene valorar en su justa medida lo que está ocurriendo. La farmacéutica que con más contumacia ha incumplido sus compromisos, Astra Zeneca, ha visto cómo se limitaban

sus exportaciones de viales producidos en la UE, cómo sus competidores ocupaban la casi totalidad del mercado que dejaba libre en Europa, quizá tentada por las ofertas de mejores postores. Ha sufrido, además, un desprestigio de marca crítico en el sector, que podría ser mucho más que justicia poética. La Comisión anuncia ahora una posible actuación ante los tribunales que, independientemente de su resultado, va a tener un brutal coste de imagen para la firma anglo sueca. Y que afectará a todos sus productos, no solo a la vacuna contra el coronavirus.

Con el certificado sanitario europeo pasa lo mismo. Solo una iniciativa a este nivel, negociada, acordada, reconocida en todo el continente sirve para algo. Y nuevamente es la paciencia, la discreción, la energía que se pone en acordar y construir la clave del éxito que a buen seguro tendrá este dispositivo, por supuesto digital, que más pronto que tarde será la clave de la recuperación de la movilidad. Quizá para valorarlo en su justa medida convenga recordar que no va a añadir restricciones de derechos a las que ya padecemos. Más bien levantará algunas a determinadas personas con más facilidad y menos burocracia que la que hay que desplegar ahora para conseguir el mismo resultado. Porque no olvidemos que viajar hoy requiere certificar, cada vez, que viajamos libres de carga viral.

La implantación del certificado ha abierto un debate que también ilustra sobre lo que significan libertades y democracia. Aquí el foco del debate está en si poner en marcha un "pasaporte" de este tipo produce discriminación, sobre cuánto y cómo invade la intimidad y sobre su compatibilidad con los rigurosos estándares europeos de protección de datos. Lo curioso es que los críticos con la gestión de la crisis, con cada propuesta o decisión pueden en el mismo acto público elogiar el modelo chino de rastreo y seguimiento que se basa en el principio de que los datos no son de las personas sino del estado y que éste tiene plenos poderes para, utilizándolos, controlar hasta los más nimios aspectos de la vida de las personas.

Todos sabemos que ese tipo de control facilita extraordinariamente los rastreos. También que no hace falta ninguna innovación tecnológica impactante para practicarlos. Con los dispositivos que el 90% de nosotros

llevamos en el bolsillo hoy, aquí y ahora, es perfectamente posible clonar el sistema chino de seguimiento y control de los contactos interpersonales y la movilidad. Pero deberíamos admitir, con la misma deportividad, que no estamos dispuestos a que nos lo apliquen. Hemos decidido, libremente, democráticamente, vivir en otro tipo de sociedad, con otras reglas basadas en el respeto a las libertades individuales. Una buena gestión, invertir en rastreadores, tener un plan, una estrategia es aquí, condición necesaria para frenar el virus. Pero insuficiente sin la aportación individual, voluntaria, responsable y militante de cada uno al bien común.

Pagar impuestos es una expresión de ese compromiso. Es la base del contrato que obliga a quienes administran a gestionar bien. Por eso la pandemia ha destapado también el efecto de los recortes en muchos sistemas de salud y la ventaja competitiva en la que se encuentran los que, como Osakidetza han estado por encima de la media en inversión en medios humanos y materiales en los tiempos más duros de la crisis. Una apuesta de largo plazo que retrata con claridad qué es y qué significa hoy ser progresista y quienes verdaderamente lo son cuando se habla de gasto público.

Hoy el lamentable nivel del debate público, la precariedad de los sistemas de contrapeso, la política líquida que fabrican algunas redes sociales son las ramas que nos impiden ver el bosque. La concertación, los acuerdos, el trabajo y la construcción han propiciado que tengamos vacunas, certificado sanitario, plan europeo de recuperación. En los LABIS, en donde se revisa cada día la situación, se aplica lo que ayer no se sabía, se adoptan decisiones y se asumen las consecuencias, hay gente que siempre está, con turnos de 24 horas 365 días, que duerme poco y trabaja mucho mientras fabrica POLÍTICA con mayúsculas.

En ese ecosistema trata de progresar la política con minúsculas. En ella militan quienes son capaces de criticar por una razón y su contraria en 24 horas, aunque para ello, por mala fe o pura ineptitud, haya que manejar ceros con osadía, quizá sin entender que no funcionan igual cuando se ponen a la derecha que la izquierda en una cifra. Con la política, con minúsculas, a los mandos, simplemente no tendríamos vacunas.